

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

El once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **LUZ MARINA ZULUAGA ARCILA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado único nacional **05001-31-05-009-2019-00364-01**.

### AUTO

De conformidad con la documentación allegada al plenario por el apoderado judicial de COLPENSIONES junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia, se reconoce personería al abogado DARÍO MAURICIO TOBÓN CHAMORRO portador de la T.P. 271.442 del C. S. de la Judicatura, para que continúe representando a COLPENSIONES en este proceso como apoderado sustituto.

#### 1. ANTECEDENTES:

A través de la presente demanda, la actora pretende que se declare que cuenta con la densidad de semanas suficiente en virtud de las inconsistencias y deudas por no pago de las cotizaciones por algunos empleadores. En consecuencia, solicita que se condene a COLPENSIONES, al reconocimiento y pago de la pensión de vejez de manera retroactiva desde el cumplimiento de la edad como beneficiaria del régimen de transición, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales.

**Como fundamentos fácticos de sus pretensiones**, expone la demandante que nació el 19 de agosto de 1958, por lo que al 01 de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad.

Aduce que laboró para distintos empleadores en el sector privado y fue afiliada al RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA el 15 de julio de 1985.

Expone, que presenta diversas inconsistencias de deudas por no pago o por cesación de las cotizaciones por parte de sus empleadores por los periodos desde noviembre de 1995 a septiembre de 1996, de octubre de 1996 a junio de 1997 con la empleadora MARÍA DEL SOCORRO ZAPATA, también desde el mes de abril de 2002 a julio de 2004 con la empleadora ANA SOFIA RESTREPO OCAMPO, y finalmente con el empleador TEJIPRENDAS LTDA entre junio de 2005 y julio de 2007, periodos que suma 237.55 semanas.

Relata, que cuenta con la densidad de 699.25 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad de 55 años, es decir, entre el 19 de agosto de 2013 y el 19 de agosto de 1993, lo que tiene soporte en su historia laboral que da cuenta de 461.7 semanas efectivamente cotizadas más las 237.55 semanas que presenta deudas por no pago o cesación de cotizaciones en su historia laboral.

Indica que cuenta con 849.51 semanas al 25 de julio de 2005, teniendo en cuenta las 703.94 semanas que aparecen efectivamente cotizadas en su historia laboral, más 190.57 semanas de inconsistencias.

## **2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:**

El *a quo* despachó de manera favorable las pretensiones de la demanda, declarando que a la accionante le asiste derecho a la pensión de vejez a partir del 19 de agosto de 2013, en cuantía del salario mínimo legal. Absolvió a la entidad accionada de las demás pretensiones de la demanda y la condenó en costas en cuantía de 3 SMLMV.

Para el efecto, argumentó el juez de primera instancia que en la historia laboral de la demandante aparecen inconsistencias de periodos en mora, de manera que atendiendo la jurisprudencia de la CSJ que ha dicho que en caso que el empleador haya incurrido en mora en los aportes y la entidad de seguridad social no haya acreditado que dio cumplimiento a las acciones coactivas para materializar el cobro de los aportes, se hará responsable de las imputaciones en la historia laboral, ya que no puede cargarse al actor con dicho proceso si éste acredita la relación laboral.

En este sentido, explicó que respecto de algunos periodos no aparecía novedad de retiro, pero que tampoco se acreditaba la existencia del vínculo contractual, no obstante, del interrogatorio de parte a la demandante se concluía que había una confesión respecto del tiempo laborado con cada empleador y los periodos en los que no trabajó, por lo que habría de tener en cuenta las imputaciones señaladas por la accionante, con otros periodos a corregir, concluyendo que a la entrada en vigencia

del Acto Legislativo 01 de 2005, alcanzó a cotizar un total de 818.71 semanas, permitiendo que la transición se le extendiera hasta el año 2014.

También señaló que la demandante logró acreditar dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, es decir, entre el 10 de agosto de 1993 y el mismo día y mes del 2013, un total de 589.86 semanas, cumpliendo con los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

### **3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

La apoderada judicial de COLPENSIONES, apela la sentencia de primera instancia, argumentando que en este caso no le asiste derecho a la demandante a la pensión de vejez, ya que el despacho avaló unas presuntas inconsistencias en la historia laboral, sin tener en cuenta que la omisión de retiro de una empresa, pudiera hacer presumir la existencia de la mora, permitiendo de esta manera a la entidad la oportunidad de requerir a las empresas morosas para que dieran las explicaciones del caso, no obstante, nunca se acreditaron las inconsistencias, pues la demandante tampoco solicitó la corrección de la historia laboral y el juez basó la sentencia en lo declarado por la demandante en el interrogatorio de parte, teniendo por probado como tiempos laborados los vacíos en la historia laboral, presumiendo con ello mora en las cotizaciones.

Aunado a lo anterior, aun en caso que se hubieran demostrado las 237 semanas que se pretendían como inconsistencias en la historia laboral, apenas hubiera alcanzado 894 semanas antes del 31 de diciembre de 2014, por lo que no podría reputarse beneficiaria del régimen de transición.

Expresa que, solicita a esta magistratura el estudio minucioso de las cotizaciones y aportes en la historia laboral, ya que mediante sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, decisión que fue confirmada por la Sala Cuarta de Decisión Laboral de este Tribunal, se analizó la petición de pensión especial de vejez por hijo inválido a cargo, en la que se concluyó que la demandante no tenía derecho a la pensión de vejez bajo el amparo del régimen de transición, por no cumplir las semanas mínimas para ello, por lo que ineludiblemente en este proceso se debería llegar a la misma conclusión, de que no se acreditaron las semanas cotizadas al sistema para acceder a la prestación solicitada.

### **4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, únicamente el apoderado judicial de COLPENSIONES, presentó oportunamente escrito de alegación, en el que anota resumidamente que teniendo en cuenta que la pretensión de reconocimiento de pensión de vejez de la demandante parte del supuesto de inconsistencias en la historia laboral, resulta necesario primero mencionar que asegura tener 237 semanas sin contabilizar en su historia laboral porque sus empleadores, en ciclos comprendidos entre 1997 y 2007, incurrieron en mora en el pago de los aportes y dichas semanas no se están contabilizando.

Sin embargo, en el expediente no aparece la prueba que acredita que la demandante tenía una relación laboral vigente para los ciclos que reclama como no pagados por su empleador, presupuesto necesario para la causación de la obligación de pagar aportes y la correlativa responsabilidad de la AFP de recaudarlos aunque sea de forma coactiva, al respecto se pronunció la Corte Suprema de Justicia en Sentencias del 30 de septiembre de 2008 con radicado 33476, criterio reiterado en sentencias con radicado 42086 y 44190 de 2012 ambas.

Así las cosas, aunque Colpensiones no cuenta con los procesos de cobro coactivos adelantados por el ISS en dicha época, también la demandante incurre en una omisión probatoria al no acreditar que efectivamente prestó sus servicios bajo la modalidad de contrato de trabajo con los empleadores que denuncia en la demanda durante los ciclos que dice ostentar mora en el aporte, lo que impide que efectivamente se desate como consecuencia la obligación de contabilizar las semanas por la omisión en el cobro coactivo.

Por otra parte, aunque se contabilizaran las semanas que la demandante denuncia como no calculadas en su historia laboral, equivalente a 237 semanas, apenas alcanzaría un total de 894 semanas antes del 31 de diciembre de 2014, lo cual resulta relevante por lo siguiente:

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagró el régimen de transición pensional para las personas que acreditaran al menos uno de los requisitos, tener 35 o más años al 1 de abril de 1994 para las mujeres o tener 15 años de servicio cotizados antes del 1 de abril de 1994.

La demandante cumplía con uno de ellos, pues al 1 de abril de 1994 tenía 35 años de edad. A este grupo de personas se les respetaría del régimen anterior los requisitos de edad, densidad de aportes y monto del régimen anterior. El régimen anterior de la demandante era el contenido en el Acuerdo 049 de 1990, que establecía como

requisitos para la pensión de vejez 55 años y 1000 semanas en cualquier tiempo o 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años.

Conforme lo anterior, la demandante no acredita 750 semanas al 25 de julio de 2005, ni siquiera con la corrección que pretende, pero suponiendo que las superara, no acredita tampoco los requisitos de 1.000 semanas en cualquier tiempo o 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años, apenas si alcanza a superar las 1.000 semanas pero en fecha posterior al 31 de diciembre de 2014, por tanto ha perdido los beneficios del régimen de transición por disposición constitucional, como lo es el Acto Legislativo 01 de 2005.

## **5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:**

El problema jurídico a dilucidar se circunscribe a establecer, si la demandante probó en este proceso cumplir con los requisitos legales para el reconocimiento y pago de pensión de vejez, en los términos del Decreto 758 de 1990, como beneficiaria del régimen de transición del Art. 36 de la ley 100 de 1993, teniendo en cuenta para el efecto, presuntas semanas en mora o con inconsistencias que aparecen en la historia laboral.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

## **6. CONSIDERACIONES:**

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007, además de resolverse la apelación de la demandada COLPENSIONES, se consultará la sentencia en favor de la entidad por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

En cuanto a lo señalado en la apelación de COLPENSIONES, referente a que en proceso que tramitó la accionante ante el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, decisión que fue confirmada por la Sala Cuarta de Decisión Laboral de este Tribunal, se analizó la petición de pensión especial de vejez por hijo inválido a cargo, en la que se concluyó que la demandante no tenía derecho a la pensión de vejez bajo el amparo del régimen de transición, por no cumplir las semanas mínimas para ello, esta Sala mediante auto del 02 de febrero de 2023, decretó como prueba de oficio,

requerir al juzgado en mención, para que remitiera con destino a este proceso, el expediente del proceso que adelantó la señora LUZ MARINA ZULUAGA ARCILA contra COLPENSIONES, que se tramitó bajo el radicado único nacional 05001-31-05-2017-00373-00, con el fin de hacer inspección judicial sobre dicho proceso y verificar lo que se debatió en el mismo.

Dicho requerimiento fue contestado por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín remitiendo el link del expediente digital el pasado 02 de marzo de 2023 y en él se pudo constatar que si bien la demandante LUZ MARINA ZULUAGA ARCILA demandó a COLPENSIONES pretendiendo el reconocimiento de la pensión especial de vejez por tener una hija inválida a cargo, lo cierto es que en dicho proceso a pesar que se declaró que la demandante no conservó el beneficio de la transición por no contar con las semanas suficientes del Acto Legislativo 01 de 2005, no fue debatido el tema de la mora de los diversos empleadores en el pago de las cotizaciones al sistema pensional, pues si bien el apoderado de la accionante al momento de presentar los alegatos de conclusión de primera instancia solicitó al juez de instancia analizar el tema de la imputación de semanas en mora y de las correcciones en la historia laboral, el *a quo* señaló en la sentencia que dicha situación no había sido planteada desde la demanda, por lo que no podía en dicho momento procesal sorprender a la parte contraria con un argumento distinto, decisión que fue confirmada por la Sala Cuarta de Decisión Laboral de este Tribunal, quien al desatar la segunda instancia, consideró que el petitum de la demanda solo estuvo dirigido a obtener la pensión especial de vejez como madre de hija discapacitada y no por el tema de imputación en mora de los empleadores de la actora.

Así las cosas, si bien la demandante ya había demandado a la AFP accionada pretendiendo la pensión bajo el cobijo del régimen de transición siendo negada la misma, lo cierto es que se trata de dos procesos distintos, con pretensiones diferentes, trayendo este nuevo proceso a colación hechos que no fueron discutidos anteriormente como la imputación por mora, que permiten al operador judicial analizar la viabilidad de dichas circunstancias porque el debate en este caso se centra en las inconsistencias de la historia laboral, pues no se ha presentado la cosa juzgada.

Para continuar resolviendo el recurso de apelación interpuesto por la accionada COLPENSIONES, es necesario manifestar que, en el presente caso se encuentra probado que la demandante nació el 19 de agosto de 1958 como se anota en la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 28 del expediente digitalizado de primera instancia, lo que significa que para para el 1º de abril de 1994, fecha de entrada en

vigencia del sistema pensional de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 35 años de edad.

También se acredita que, para la data de la entrada en vigencia del sistema pensional de la Ley 100 de 1993, la actora se encontraba afiliada al ISS hoy COLPENSIONES, como se corrobora con el reporte de semanas cotizadas más actualizado expedido el 01 de octubre de 2019, obrante a partir del folio 34 del expediente digital de primera instancia, en el que registra cotizaciones desde el 15 de julio de 1985, por lo que, en principio la demandante es beneficiaria del régimen de transición de pensiones de vejez del extinto ISS hoy COLPENSIONES, conforme lo previsto en el artículo 36 de Ley 100 de 1993, es decir, por contar con 35 años o más de edad, por lo que tiene derecho a que se le defina el derecho que pueda tener a la pensión de vejez, con las normas del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de mismo año, el que otorga derecho a pensión de vejez al afiliado o afiliada, que tenga cotizadas 1000 semanas en cualquier tiempo o 500 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, edad que en el caso de las mujeres es de 55 años, requisito que afirma la demandante, acreditó desde el desde el 19 de agosto de 2013.

A pesar de lo expresado en precedencia, impone recordar que el Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso en su parágrafo transitorio 4to, que el régimen de transición del Art. 36 de la Ley 100 de 1993, terminaba el 31 de julio de 2010, dejando a salvo a quienes estando en dicho régimen, tuvieran a la fecha de su entrada en vigencia (29 de Julio de 2005 conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional), 750 o más semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, a los que se les extiende el régimen de transición hasta el año 2014.

Frente a lo anterior, revisadas las historias laborales que obran en el plenario, observa la Sala que entre el 15 de julio de 1985 y el 29 de julio de 2005, la actora cuenta con un total de **704.62 semanas** efectivamente cotizadas, mismas que resultan insuficientes para cumplir con el requisito establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 para extender el beneficio transicional hasta el 31 de diciembre de 2014, lo que a su vez obligaría a que su derecho pensional sea analizado a la luz de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, norma que, a partir del 1 de enero de 2014 exige para el caso de las mujeres contar con 57 años, edad a la que arribó la demandante el 19 de agosto de 2015, requiriendo para dicha calenda un total de 1.300 semanas de cotización, las cuales no acredita, pues en la historia laboral más actualizada únicamente cuenta con **1.106.29 semanas cotizadas hasta el mes de agosto de 2019.**

Sin embargo, afirma la actora en su demanda, que en la historia laboral existen inconsistencias, pues COLPENSIONES dejó de tener en cuenta varios periodos laborados entre noviembre de 1995 y mayo de 2007 que suman un total de 237.55 semanas.

Para resolver, debe señalarse que conforme lo previsto en el artículo 167 del CGP, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, lo que significa que, por regla general, corresponde a cada parte invocar claramente los hechos en que finca sus pretensiones y además probarlos mediante prueba idónea.

En este sentido, el apoderado de la actora afirma en la demanda que la administradora de pensiones, tiene el deber de administrar los aportes y que en caso de inconsistencias, deudas por no pago o cesación de cotizaciones, las mismas debe ser a costa de la entidad administradora, quienes cuenta con todo el andamiaje legal para poder subsanar dichas inconsistencias, es decir, que deben por ley adelantar las gestiones encaminadas a obtener el cobro de los aportes ante las omisiones por parte de los empleadores.

En este punto, coincide la Sala con lo señalado por la parte actora, cuando indica que la falta de pago oportuno por parte del empleador o la omisión en el ejercicio de la acción de cobro por parte de las administradoras de fondos de pensiones no debe perjudicar al trabajador, dado que la jurisprudencia de la SCL del CSJ, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, han precisado que las AFP deben tener en cuenta los aportes pensionales que se encuentren en mora en el pago de los empleadores del trabajador dependiente, pues al haber omitido la acción de cobro de las cotizaciones las AFP deben asumirlas sin que se le pueda trasladar al trabajador las consecuencias de su inacción en el cobro de las cotizaciones.

A pesar de lo anterior, para que se pueda predicar la aludida mora, es menester que el trabajador que la alega, pruebe que efectivamente trabajó con el empleador del que invoca la mora o que ello se pueda deducir de la prueba obrante en el plenario, pues bien puede suceder y como en muchos casos se ha constatado que una vez termina la relación laboral del trabajador con su empleador, este cesa en el pago de las cotizaciones, pero no reporta la novedad de retiro a la AFP, por lo que está asume que hay una deuda y así lo anota en la historia laboral, pero tal anotación no puede interpretarse sin prueba adicional como mora del empleador.

En ilación con lo anterior, la Sala hará un estudio minucioso de la historia laboral de la



demandante y demás pruebas documentales obrantes en el plenario, con el fin de determinar si en efecto existen inconsistencias que puedan ser tenidas en cuenta como mora, a efecto de determinar el posible derecho a la pensión de vejez solicitado.

Pues bien, en primer lugar, aduce la demandante en los hechos del libelo genitor, que las inconsistencias que presenta su historia laboral son los siguientes empleadores:

- MARÍA DEL SOCORRO ZAPATA: desde noviembre de 1995 a septiembre de 1996 y de octubre de 1996 a junio de 1997.
- ANA SOFIA RESTREPO OCAMPO: desde abril de 2002 a julio de 2004.
- TEJIPRENDAS LTDA entre junio de 2005 y julio de 2007.

Revisada la historia laboral, observa la Sala que con la empleadora MARÍA DEL SOCORRO ZAPATA, no se le pueden tener en cuenta a la demandante cotizaciones desde noviembre de 1995, porque para dicha data la demandante aparece cotizando con el empleador ISRAEL ZAPATA CREACIONES, aunque para este ciclo, existe una inconsistencia, toda vez que aparecen reportados 30 días y cotizados 26, de manera que faltan **4 días** que deben ser tenidos en cuenta en la sumatoria de semanas.

Para el mes de diciembre de 1995, también se debe hacer una corrección en la historia laboral, porque aparecen reportados 15 días y cotizados 0 apareciendo en el detalle el pago de 15 días con la novedad de retiro de empleador CREACIONES LANDILIA ISRAEL ZAPATA, de manera que faltan **15 días** para imputar en la historia laboral.

Ahora, para el mes de enero de 1996, empieza cotizaciones con la empleadora MARÍA DEL SOCORRO ZAPATA, hasta abril de 1996, pero para los ciclos de mayo de 1996 y julio de 1997, a pesar que no aparece cotización alguna, COLPENSIONES tiene en cuenta dichos ciclos como cotizados con la anotación “DEUDA PRESUNTA, PAGO APLICADO DE PERIODOS POSTERIORES”, por lo que no hay lugar a hacer corrección alguna.

Para el ciclo de agosto de 1996, no existe cotización, pero aparecen reportados 30 días y cotizados 8 días, faltando un total de **22 días** por imputación que la Sala tendrá en cuenta pues tal registro la que los reporta.

Para el ciclo de septiembre de 1996, aparece pago de cotización y 30 días reportados, pero 0 cotizados, de manera que se deben tener en cuenta los **30 días** de dicho ciclo. La misma situación ocurre para el periodo de noviembre de 1996, de manera que también se tendrán en cuenta **30 días** para dicho ciclo.

El mes de octubre de 1996 no aparece en la historia laboral, como tampoco aparece cotización alguna, por lo que no puede ser tenido en cuenta para ningún efecto, pues la demandante no demuestra relación laboral en este periodo con empleador alguno.

Ahora, a partir del mes de noviembre de 1996, no aparece registro de cotización alguna, porque la siguiente cotización es con la empleadora MARÍA ISABEL GUERRA para el mes de julio de 1997, por lo que al no existir prueba del vínculo laboral con la empleadora MARÍA DEL SOCORRO ZAPATA entre diciembre de 1996 y junio de 1997, no es posible aducir mora por parte de dicho empleador.

Respecto de la empleadora ANA SOFIA RESTREPO OCAMPO, dice la demandante que existen inconsistencias desde abril de 2002 a julio de 2004. La historia laboral da cuenta que con dicha empleadora empezó cotizaciones en agosto de 2001 encontrando en dicho ciclo una inconsistencia, porque aparecen reportados 30 días y cotizados 13, por lo que se deben sumar en dicho ciclo un total de **17 días**.

Para el dicho de enero de 2002, también hay una inconsistencia, porque aparecen reportados 30 días y cotizados 28 días, debiéndose sumar **2 días** en la historia laboral.

Las cotizaciones con esta empleadora van hasta marzo de 2002, sin que exista novedad de retiro, pero tampoco la demandante prueba que la relación laboral continuó, empezando nuevas cotizaciones a partir del mes de julio de 2004 con el empleador JAVIER ARMANDO QUIROZ, lo que conduce a que contrario a lo concluido por el *a quo*, no puede predicarse mora de la empleadora ANA SOFIA RESTREPO OCAMPO entre abril de 2002 a julio de 2004, porque no hay ninguna prueba que dé cuenta de la existencia de relación laboral., siendo relevante que esta empleadora durante aparecen las cotizaciones interrumpidas entre el ciclo de agosto de 2001 y marzo de 2002, pagó oportunamente mes a mes las cotizaciones, por lo que no se encuentra razón para pensar que omitiera seguir pagando las cotizaciones intempestivamente si había continuado la relación, lo que es indicativo que tal relación laboral no persistió más allá marzo de 2002 que se paga la última cotización.

También menciona la accionante de inconsistencias con el empleador TEJIPRENDAS LTDA entre junio de 2005 y julio de 2007. Vista la historia laboral, la misma da cuenta que con dicho empleador empiezan cotizaciones en el mes de mayo de 2005 en un total de 15 días, sin obre en el proceso prueba de continuidad en la relación laboral para los ciclos de junio y julio de 2005 en los que no registra cotización, por lo que, en este interregno de tiempo, no puede imputarse mora al empleador, toda vez que la demandante no demostró el vínculo laboral en tale meses, siendo carga de su parte.

Nuevamente aparecen cotizaciones con el empleador TEJIPRENDAS LTDA a partir de agosto de 2005 de manera continua y sin ninguna inconsistencia con pago oportuno de la cotización hasta abril de 2006, sin que la actora haya probado que trabajó en el mes de mayo que no se registra cotización.

El ciclo de junio de 2006, vuelve a registrarse cotización con TEJIPRENDAS LTDA con cotización de solo 2 días, que se corresponde con el IBC y el monto de la cotización pagada.

En los ciclos de julio y agosto de 2006 tampoco aparece reporte alguno de cotización por lo que no pueden ser tenidos en cuenta, ni el ciclo de octubre de 2006 por la misma razón, registrando nueva cotización con este empleador TEJIPRENDAS LTDA en noviembre de 2006, sin marcar novedad de retiro, pero tampoco existe prueba que la relación laboral haya sido ininterrumpida, o que haya perdurado más allá del mes de noviembre de 2006, por lo que no hay lugar a hacer imputación por mora.

Ahora, existen otras inconsistencias que encuentra la Sala en la historia laboral de la accionante que no fueron mencionadas en la demanda, pero que en aras de verificar el posible derecho que le pueda asistir a la pensión de vejez, se hará el correspondiente análisis, dichos ciclos son los siguientes:

El periodo de septiembre de 1997, que aparece reportado un día pagado con novedad de retiro, pero no se contabiliza como cotizado, por lo que se debe tener en cuenta y sumar **1 día**.

El ciclo de septiembre de 1999, que aparecen reportados 30 días y cotizados 0 días, con la anotación "*Pago aplicado a periodos Anteriores*" por lo que se deben tener en cuenta los **30 días** como cotizados.

El ciclo de julio de 2004 que aparecen cotizados tan solo 19 días, los que se corresponden con el IBC en un monto inferior al SMLMV, por lo que se entiende que la actora no trabajó los 30 días

El ciclo de junio de 2008, que aparecen reportados 30 días con IBC del salario mínimo legal, y cotizados 29 días, faltando **1 día** por tener en cuenta.

Finalmente, se observan inconsistencias en los periodos de mayo y diciembre de 2018 y de enero a marzo de 2019, en los que aparecen 30 días reportados y 0 cotizados en cada ciclo por deuda por no pago del subsidio por parte del estado, por lo que por cada

periodo habrá de tenerse en cuenta los periodos cotizados por 30 días, para un total de inconsistencias en este interregno de tiempo de **139 días**.

Así las cosas, encuentra la Sala que las inconsistencias en la historia laboral de la actora totalizan **330 días** equivalentes a **47.14 semanas**.

Ahora, es importante para la Sala destacar que a pesar que el juez de instancia le dio pleno valor probatorio al interrogatorio de parte que fue decretado de manera oficiosa a la demandante, concluyendo con el mismo que se probaron los extremos de cada relación laboral que tuvo la actora, lo que le permitió llenar los vacíos que se encontraban en la historia laboral, lo cierto es que contrario a lo decidido por el *a quo*, el interrogatorio de parte se realiza para provocar prueba de confesión en asuntos adversos al declarante, pero no para constituir prueba a su favor, de manera que no podría tenerse como plena prueba de la mora del pago de cotizaciones por los empleadores de la demandante, pues se itera, quien tenía la carga de la prueba de demostrar que los vacíos que se aprecian en la historia laboral corresponde a mora con los distintos empleadores, era la demandante, sin embargo, aparte del interrogatorio de parte, no obra al interior del plenario ninguna otra prueba de la cual pueda desprenderse que efectivamente la demandante laboró de manera ininterrumpida para la señora MARÍA DEL SOCORRO ZAPATA entre noviembre de 1995 a junio de 1997, para la señora ANA SOFIA RESTREPO OCAMPO entre abril de 2002 a julio de 2004 y para TEJIPRENDAS LTDA entre junio de 2005 y julio de 2007, según el pormenorizado detalle que se hizo anteriormente, pues como ya se anotó, no acreditó la demandante por ningún medio haber laborado de manera continua en los mencionados periodos y para los referidos empleadores y por tal razón no puede asumir la judicatura que efectivamente existió relación laboral ininterrumpida.

Sobre esa situación particular del interrogatorio de parte, se ha ocupado en múltiples providencias la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como la SL 3539 de 2020 o la SL 4309 del 4 de noviembre de 2020, rad. 85949 en la que indicó:

*“Para que se configure una confesión es necesario que haya versado sobre hechos que producen consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria, conforme a lo previsto por el artículo 191 del Código General del Proceso, antes artículo 195 del CPC, lo que no ocurrió en el caso.*

*Con fundamento en lo anterior, no es dable adentrarse en el análisis del interrogatorio de parte rendido por la actora ya que, de un lado, tal medio probatorio no es calificado en casación a menos que se acuse como confesión, y de otro, no es admisible que la parte denuncie su propio interrogatorio para efectos de tener por probados los hechos afirmados por ella en el proceso.*

*Sobre esto último, debe recordarse que la Corte ha estimado que no es válido que la parte que realiza una declaración persiga que esta se tenga como prueba de los supuestos fácticos que quiere demostrar en el juicio. En efecto, en sentencia CSJ SL, 15 jul. 2008, rad. 31637, reiterada en CSJ SL4685-2018, expuso: «[...] a ninguna de las partes le es dable producir sus propias pruebas, es decir, que la parte que hace una declaración de un hecho que lo favorece, no puede pretender en el proceso hacerlo valer en su propio beneficio» (subrayado fuera del texto original).»*

Finalmente, no se desconoce que el inciso 2º del art. 191 del Código General del Proceso consagró una nueva regla sobre la interpretación de esta prueba, al señalar que *“La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas.”* Es decir, se ubicó la declaración de parte como un medio autónomo de prueba, lo cual se traduce en que le es permitido a las partes rendir su versión de los hechos, declaración que puede ser tomada para beneficio propio, pero no como prueba única para acreditar un hecho, sino para respaldar otras pruebas en el mismo sentido, interrogatorio que además debe ser valorado de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas, por lo que resulte apenas obvio que dada la especial posición que ocupan dentro del proceso judicial, han de ser valoradas con mayor rigor y no menos cautela en cuanto a su coherencia, precisión y claridad, en sinergia con el restante conjunto probatorio procesal.

Y es así que no existe en este proceso, ninguna otra prueba distinta a la declaración rendida por la actora, que pudiera ser respaldada, con la citada declaración.

De otra parte, en la praxis judicial se ha encontrado que en algunas historias laborales de los afiliados cuando no se reporta la novedad de retiro de parte de algunos empleadores entre los años 1995 a 1999, dichas anualidades se reflejan en ceros con la observación *“Su empleador presenta deuda por no pago”* y sin que se consigne IBC reportado ni cotización pagada. Y en virtud de ello, en la práctica, se demanda el reconocimiento de tales periodos aduciendo la mora del empleador. Circunstancia que se ha visto subsanada con la expedición posterior del reporte de semanas de los asegurados actualizado. Por lo que la jurisprudencia ha precisado que al operador judicial le corresponde en esos casos comprobar que en ese lapso existió un contrato de trabajo o, en otros términos, que el empleador moroso estaba obligado a efectuar dichas cotizaciones porque el trabajador prestó servicios durante el mismo, a efectos de declarar la existencia de periodos no contabilizados, prueba que, en este caso, no encuentra la Sala.

Corolario de lo dicho, al sumar las semanas que se encontraron con inconsistencias, con las que reposan en el historial de semanas cotizadas por la actora, de ellas se desprenden un total de **1.106.29** semanas cotizadas hasta el mes de agosto de 2019 que reposan en la historia laboral, más **47.14** semanas de inconsistencias, para un total de 1.153,43 semanas en toda la vida laboral, de las cuales, **721.76** fueron cotizadas antes del 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y en ese orden de ideas, la demandante no reúne el número mínimo de semanas que exige el Acto Legislativo 01 de 2005 para extender su beneficio transicional hasta el 31 de diciembre de 2014, ni tampoco acredita el requisito de semanas exigido por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, para acceder a la pensión de vejez, motivo por el cual se confirmará la decisión absolutoria de primera instancia.

Finalmente, aclara la Sala que como quiera que la demandante con la presente demanda pretendía el reconocimiento de la pensión de vejez centrando el debate en las inconsistencias de la historia laboral, esta sentencia no hace tránsito a cosa juzgada frente al derecho que pueda tener o no la actora a que en proceso ordinario laboral se declare que laboró con los empleadores MARÍA DEL SOCORRO ZAPATA, ANA SOFIA RESTREPO OCAMPO y TEJIPRENDAS LTDA., y que como consecuencia de ello, pueda la demandante pagar el cálculo actuarial por las cotizaciones en que hayan omitido afiliarla dichos empleadores al sistema pensional, por lo cual podrá la actora si así lo considera, formular demanda en este sentido.

Conforme las consideraciones, fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, se REVOCARÁ la decisión de primer grado, declarando probada la excepción de FALTA DE REQUISITOS PARA CAUSAR EL DERECHO A LA PENSIÓN DE VEJEZ propuesta por COLPENSIONES en la contestación de la demanda.

Costas en primera instancia a cargo de la demandante y a favor de la demandada COLPENSIONES las que fijará el *a quo*. En esta instancia no se imponen costas por haber prosperado el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES.

## 7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

## RESUELVE

**PRIMERO: REVOCAR** la sentencia del 03 de agosto de 2020 proferida por el JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora **LUZ MARINA ZULUAGA ARCILA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**, para en su lugar **ABSOLVER** a COLPENSIONES de todas las pretensiones de la actora por la prosperidad de la excepción de FALTA DE REQUISITOS PARA CAUSAR EL DERECHO A LA PENSIÓN DE VEJEZ.

**SEGUNDO:** Costas en primera instancia a cargo de la demandante y a favor de la demandada COLPENSIONES las que fijará el *a quo*. Sin costas en segunda instancia.

La anterior sentencia se notifica a las partes por EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, por quienes en ella han intervenido,

Los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5a7bfab2fb3fb5fc7c4f474d61d3032a789589a292c0e48633a29972cea9b1bd**

Documento generado en 11/05/2023 03:15:38 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**